

pecto de este punto, que el quejoso fué destinado al servicio militar por la autoridad política del pueblo de Tecomilt en 21 de Junio último, debía declarar y declarar: que la Justicia de la Union ampara y protege á Antonio de Jesus Hueipuerta, contra la resolucion que motivó este recurso. Hágase saber, y publicada la sentencia en la forma acostumbrada, elévense las actuaciones á la Corte Suprema de Justicia de la nacion. El ciudadano juez lo mandó y firmó. Doy fé.—*José A. Bucheli.*—*Joaquín Sanchez Gonzalez.*

Es copia que certifico.—*Joaquín Sanchez Gonzalez*, secretario.

EXECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Febrero 24 de 1873.—Visto el recurso de amparo que en 2 de Diciembre de 1872 promovió ante el juez 1º interino de Distrito de México, Romana Rosains, vecina de Tecomilt, del Distrito de Xochimilco, por su hijo Antonio de Jesus Hueipuerta, quejándose de que este sin su voluntad y teniendo escepcion legal ha sido consignado de leva al servicio de las armas en el batallon llamado Supremos Poderes, con violacion de la garantía otorgada por el art. 5º de la Constitucion Federal. Vistas las constancias de autos y atenta la sentencia del juez de Distrito referido en la cual concede el amparo pretendido, teniendo en consideracion que por parte de Jesus Hueipuerta se ha probado en autos que consignado á las armas en 21 de Junio del año próximo pasado, no se observó con él las prevenciones de la ley de 17 de Mayo del mismo año, pues aparece que es hijo único de viuda á quien sostiene y que esta escepcion no se apreció por falta de la calificacion debida, resultando, en consecuencia, que el servicio

militar que presta es contra su voluntad y con la violacion de garantía que ha reclamado.

Con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve: Por sus propios legales fundamentos se confirma esa sentencia del juez 1º de Distrito de México, pronunciada á 24 de Enero último, en la que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á Antonio de Jesus Hueipuerta contra la resolucion que motivó este recurso.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Lic. Luis Malanco*, secretario.

Son copias que certifico. México, Marzo 4 de 1873.—*Lic. Agustin Peralta*, oficial mayor

AMPARO promovido ante el Juzgado de Distrito de Tamaulipas, por el C. José Miranda y Cónique, por sí y en representacion de varios empleados de la aduana marítima de Tampico, contra actos del C. alcalde 1º que trata de comprender los sueldos en la ley suplementaria de hacienda de 10 de Junio último, á pesar de que esta solo grava los capitales.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito:

El Fiscal dice: que ha dudado si debía pedir en este negocio, porque como

empleado federal, lo mismo que los solicitantes, pudiera sospecharse de su imparcialidad; pero como quiera que esta circunstancia habría de encontrarse en cualquiera otro que hiciera las veces del que suscribe, se ha creído en obligación de manifestar su sentir, porque de otro modo se paralizaría indefinidamente la sustanciación de este juicio, y quedaría indirectamente quebrantada la ley de 20 de Enero de 1869, que para dicha sustanciación señala términos muy perentorios.

La ley de este Estado contra la cual se pide amparo, impone en su art. 1º una contribución de un uno por ciento sobre *"toda clase de capitales."* El art. 2º dice: que "se entiende por capital los giros de campo, fincas rústicas y urbanas, trenes de ruedas, recuas, embarcaciones, salinas, aguas de regadío, giros mercantiles, industriales; profesiones científicas y de artes y oficios."

Tal vez sea una simple falta de redacción; pero el hecho es que se nota alguna ambigüedad en este último artículo, y tan fundadamente puede sostenerse que habla, como que no habla de los empleados y sus sueldos.

Claro es que si no habla de ellos, debe concederse el amparo contra las disposiciones de la autoridad inmediata ejecutora de un precepto que no está en la ley. Y si habla de ellos, es necesario examinar las razones en que los solicitantes apoyan su petición.

De las que están espuestas en el escrito con que empiezan estos autos, la mas poderosa es la siguiente:

La contribución recaé tanto sobre el sueldo vencido y consumido ya (al menos en su mayor parte) desde Enero próximo pasado hasta la fecha, cuanto sobre el que está por vencer desde ahora hasta Diciembre próximo, y en ambos casos es injusta. El primero, es decir el vencido y consumido, por lo mismo que no existe, no puede ser llamado capital: co-

brar sobre él es tanto como cobrar por lo que se tuvo y ya no se tiene; es tanto como cobrarle á un hombre pobre hoy, porque se sabe que fué rico ayer. El segundo sueldo, es decir el que está por vencerse, tampoco merece el nombre de capital por lo mismo que no se recibe todavía: cobrar sobre él es tanto como cobrar sobre lo que se tendrá; es tanto como cobrar al pobre hoy por lo que formará su riqueza mañana, y esto con la notable circunstancia de que el cobrador no le asegura que en efecto le llegará tal riqueza, pues un empleado de un momento á otro puede ser removido, y si lo es, después de haber pagado contribución por sueldos futuros, resulta la enorme injusticia de que se le exigió contribución por lo que nunca llegó á tener.

No cree el Fiscal que pueda contestarse satisfactoriamente este razonamiento.

Ademas es muy sostenible que á un sueldo no puede dársele el nombre de capital, al menos en el sentido en que se toma esta palabra cuando se trata de exigir contribución. Siempre se exceptúa de estos á los que no tienen mas que lo necesario para subsistir, y de aquí se infiere que lo que está especial é inmediatamente destinado para la subsistencia del hombre, ó se ha acostumbrado no considerarlo como capital, ó creerlo libre de contribución.

Pues bien, el sueldo de un empleado está especial é inmediatamente destinado á ese objeto, y se comprende que lo mas ó menos pingüe que sea, está en relación con la mas ó menos dignidad y categoría del empleo que se desempeña, pues un Presidente, un Magistrado, un Gobernador tienen que subsistir de una manera mas decorosa, y por lo mismo mas cara que un empleado de una aduana, así como este tiene que subsistir de una manera mas cara y decorosa que el individuo que solo posee un capital de cien pesos, cuyo individuo está espresa-

mente exceptuado de contribucion en el art 10 de la ley. Si pues, este individuo está exceptuado porque, segun su posicion social, no tiene con aquellos cien pesos mas que lo necesario para vivir, parece muy natural que tambien un empleado que segun su posicion social no tiene mas que su sueldo para vivir, sea exceptuado del mismo modo.

Puede, sin embargo, objetarse que en todo sueldo debe haber siempre algun sobrante. Esto, lo único que quiere decir es, que acaso el único modo de dar una ley enteramente equitativa sobre sueldos, sería el de que se calculase, por medio de juntas calificadoras, ó de algun otro modo, cuánto queda libre de ellos á los empleados al fin de cada mes, despues de deducido lo que gastan en su subsistencia, y á esta parte libre y nada mas, cobrarle contribucion. Pero cobrada sobre todo el sueldo es gravar lo que está destinado á las inmediatas necesidades de la vida, y en tal caso se vuelve injusta la excepcion del art. 10 de la ley. *Ubi cadem est ratio, cadem debet esse juris dispositio.*

Ignora el Fiscal si en estos Estados los empleados federales están exentos de toda clase de contribuciones como aseguran los ocurrentes; pero lo que le consta es que los militares (que tambien son empleados federales) no pagan ninguna por su sueldo. Parece que en esto no hay justicia, y que, ó los militares deben ser de igual condicion que los otros servidores de la federacion, ó estos de la misma que aquellos. No se percibe entre unos y otros mas diferencia que la diferencia de servicio, y si se alegara como razon en favor de los militares que el que prestan los obliga á veces á exponer la vida, se podria responder que, á lo menos mientras están en donde no la esponen, deberían ser gravados con las mismas contribuciones que pagan los demas empleados. Sin embargo, no es así, y el principio de igualdad ante la ley,

queda en este caso absolutamente sin observancia.

Por último, de cualquiera manera, que se vea esta cuestion de contribuciones impuestas por un Estado á sueldos federales, se encuentra en último resultado que disminuye estos, los reduce á menor cantidad de la que el Supremo Poder Legislativo habia fijado. Si en este dijo que el administrador de tal aduana tendrá 5000 pesos y el Estado por contribucion ordinaria le exige al año 50 pesos, y de cuando en cuando otros 50 pesos por contribucion extraordinaria, el efecto inmediato de tal disposicion es que el verdadero sueldo de aquel administrador no es ya de 5000 pesos sino de una cantidad menor, y siendo de una cantidad menor, resulta que la ley general quedó en parte derogada por la ley de un Estado, para lo cual no tiene ni puede tener facultades en ningún caso.

Por todo esto, el Fiscal cree prudente el amparo solicitado, y pide se conceda. Pide ademas que el Juzgado exija á los solicitantes un ejemplar de la ley para glosarlo en autos, á fin de que la vea la Suprema Corte cuando el expediente pase á ella, y que las notificaciones que ocurran, se hagan á los mismos interesados y no al apoderado que nombraron, mientras no aparezca bastantado el poder de fojas 5.

Tampico, Agosto 19 de 1873.—*Lic. Modesto Ortiz.*

Otro sí. Por la dilacion de un dia más del que permite la ley para evacuar este traslado y la desordenada redaccion del anterior pedimento, pide el Fiscal al Juzgado se sirva dispensarlo, por haber estado algo malo estos dias.—*Ortiz.*

Es copia fiel y exacta del original que certifico. Tampico, Octubre 24 de 1873.—*S. Torres.*—Asistencia.—*Manuel J. Solórzano.*—Asistencia.—*M. Trascierra.*

SENTENCIA del C. juez de Distrito.

Juzgado de Distrito de Tamaulipas.—Tampico, Octubre 24 de 1872.—Visto este juicio de amparo promovido por el C. José Miranda y Cónique, oficial primero de esta aduana marítima por sí y en representación de los CC. Juan N. Rábago, administrador de la misma; Adolfo M. Obregon, contador; Mariano Salgado y Miguel M. Gonzalez, vistas; Juan del Río, Manuel Aragon y Francisco Gomez, oficiales; Fermín Perez, Darío García, Leopoldo Ruiz y Antonio Mendizábal, escribientes; Pedro Casero, alcaide; Ramon P. y Castro, mozo de oficina; Gabriel Ruiz comandante de celadores, Gaspar Z. Ambros, Carlos B. Segura, Antonio Ruiz, Antonio Monterrubio, Francisco Aspiró, Francisco Balandrano, Francisco G. Hernandez, Emilio Hopphan, Felipe Oropeza, Teófilo Ramirez, José G. del Cañizo, Pedro Maya y Miguel Malo, celadores; Bruno Rios y Victoriano Arteaga, primero y segundo patron; Joaquín Guillen, Abraham Arellanos, Espiridion Valdés, Antonio Cartagena, Felicitó Ramirez, Irineo Correa, Máximo Orta, Joaquín Moya, Gregorio Cruz y Manuel Torrero, marineros; visto el ocurso de 7 de Agosto último en que los promoventes se quejan de los actos del ciudadano alcalde primero, que trata de comprender los sueldos de los empleados en la ley suplementaria de hacienda, de 10 de Junio último, á pesar de que esta solo gravó los capitales; visto el informe de la autoridad ejecutora en que procura justificar su procedimiento con las calificaciones hechas por la junta respectiva, y aprobadas por la superioridad, y la contestacion del ciudadano promotor fiscal en que pide se admita el recurso; vista la ampliacion hecha por los quejosos en 19 de Agosto y mandada acumular á este juicio por auto de 2 de Setiembre próximo pasado, la cual obra de fojas 16 á 18

de los autos, fundando la queja en las fracs. 1ª y 3ª, art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, por juzgar violadas las garantías consignadas en los arts. 4º y 14 de la Constitucion federal: visto el texto de la ley de hacienda que se cita, el auto en que se abrió este negocio á prueba, el de citacion para sentencia, y todo lo demas que ver convino:

Considerando: Que aunque en el ocurso de 7 de Agosto comprenden los promoventes su queja en la frac. 3ª, art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, por considerar invadida, con la aplicacion de la ley local las facultades del Congreso de la Union, único competente para disminuir las dotaciones de los empleados federales (art. 72, frac. 11ª de la Constitucion); sin embargo, en la ampliacion de 19 del mismo Agosto espresan servirles tambien de fundamento la frac. 1ª, del mismo art. 1º, por sentirse atacados en las garantías que les acuerdan los arts. 4º y 14 de la Constitucion.

Que una contribucion sobre sueldos, salarios y capitales, decretada á mediados de un año cualquiera, no puede comprender los sueldos y salarios correspondientes al primer semestre de ese mismo año, tanto por considerarse aquellos ya consumidos, como porque importaria retrotraer los efectos de la ley á un tiempo anterior á su expedicion, lo que prohibe espresamente el art. 14 de nuestro Código fundamental.

Que si bien los empleados de la Federacion están obligados como los demas ciudadanos á satisfacer las contribuciones ordinarias impuestas por los Estados, no parece que deban ser gravados sus haberes con subsidios é impuestos suplementarios que puedan disminuir estos hasta el grado de alterar el presupuesto contra la intencion del legislador, perjudicando el servicio público.

Que esta disminucion arbitraria de los sueldos de los empleados podria con-

vertirse en un medio indirecto de impedir el libre ejercicio de un trabajo honesto, contra el espreso tenor del art. 4º de la misma Constitucion.

Que el H. congreso de Tamaulipas tuvo sin duda presentes estas consideraciones para no comprender los sueldos y salarios en la contribucion suplementaria de un uno por ciento decretada en 10 de Junio sobre toda clase de capitales, segun se espresa en el art. 1º; y todavía para evitar dudas se especifican minuciosamente en el art. 2º los giros, industrias y profesiones que deben considerarse como tales capitales, sin que en ninguna de las clases así especificadas puedan comprenderse los ejercicios lucrativos ni los sueldos de los empleados.

Considerando, finalmente; que no obstante esté silencio, ó mas bien esta exencion de la ley, la junta calificadora y el ciudadano alcalde primero se han empeñado, la una, en aplicar el impuesto extraordinario á los sueldos, y el otro, en hacer efectiva la aplicacion, contra el testo espreso de la ley tamaulipeca y atacando con ese acto el derecho de propiedad, que es otra de las garantías constitucionales.

Por tanto, con fundamento del art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869 y art. 101 de la Constitucion federal, y de conformidad con lo pedido por el ciudadano promotor, se declara: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. José Miranda y Cónique y demas empleados federales, sus poderdantes, que suscribieron el ocurso de 7 de Agosto y constan al principio, contra los actos del ciudadano alcalde primero de esta ciudad, que tienden á hacer estensivo sobre sus sueldos el impuesto extraordinario decretado por la ley de 10 de Junio último. Notifiquese este fallo, sacándose de él copias para su publicacion en el "Semanario Judicial" y "Diario

Tomo III.—Parte II.

del Gobierno," elévense los autos originales á la Suprema Corte de Justicia.

Así lo proveyó el C. Simon Torres, juez 3º suplente de Distrito, con asistencia y consulta del ciudadano asesor, Lic. Ramon N. Nufiez, firmando ambos con los testigos de asistencia por no haber secretario nombrado: lo testificamos. —Simon Torres.—Lic. Ramon M. Nufiez.—Asistencia, Manuel I. Solórzano.—Asistencia, M. Trascierra.

Es copia fiel y esacta del original, que certifico. Tampico, Octubre 24 de 1872. —S. Torres.—Asistencia, Manuel I. Solórzano.—Asistencia M. Trascierra.

EJECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Febrero 27 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Tampico, por el C. José Miranda y Cónique, oficial mayor de la aduana de ese puerto, por sí, y en representacion de los CC. Juan N. Rábago, Administrador de la misma, Adolfo M. de Obregon, contador, Mariano Salgado y Miguel M. Gonzalez; vistas, Juan del Rio, Manuel Aragon y Francisco Gomez, oficiales; Fermin Perez, Darío García, Leopoldo Ruiz y Antonio Mendizabal, escribientes; Pedro Casero, alcaide; Ramon P. y Castro mozo de oficina; Gabriel Ruiz, comandante de celadores; Gaspar Z. Ambros, Carlos B. Segura, Antonio Ruiz, Antonio Monterrubio, Francisco Aspiró, Francisco Balandiano, Francisco G. Hernandez, Emilio Hoppha, Felipe Oropeza, Teófilo Ramirez, José G. de Cañizo, Pedro Maya y Miguel Malo, celadores; Bruno Rios y Victoriano Arteaga, primero y segundo patron; Joaquin Guillen, Abraham Arellano, Espiridion Valdés, Antonio Cartagena, Feliceito Ramirez, Irineo Correa, Máximo Orta, Joaquin Mo-

ya, Gregorio Cruz y Manuel Torrero, marineros, contra los actos del ciudadano alcalde 1º, que trata de comprender los sueldos de los empleados federales en los artículos de la ley suplementaria de contribuciones, expedida por la legislatura del Estado, en 10 de Junio de 1872, fundándose la autoridad contra quien se pide el amparo, en el dictámen de la junta calificadora establecida para el efecto, y cuyo dictámen fué aprobado por la superioridad, alegando los promoventes que con este hecho se violan las garantías consignadas en los arts. 4º y 14 de la Constitución general de la República. Vistas las constancias de autos, y considerando: que los Gobiernos de los Estados no tienen facultad para imponer contribuciones que graven directamente los sueldos de los empleados de la Federación, el hecho del alcalde 1º de Tampico que trata de hacer efectiva la contribucion suplementaria, incluyendo en ella los sueldos de los empleados de la aduana, importa una violación expresa de los artículos aducidos por los quejosos en su escrito de demanda. Con tales fundamentos, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juzgado de Distrito de Tampico, cuya parte resolutive es como sigue: "Que la Justicia de la Union ampara y protege al C. José Miranda y Cónique y demas empleados federales, sus poderdantes, que suscriben el ocurno de 7 de Agosto y constan al principio, contra los actos del ciudadano alcalde primero de esta ciudad, que tienden á hacer extensivo sobre sus sueldos, el impuesto extraordinario decretado por la ley de 10 de Junio último."

Devuélvase sus actuaciones al Juzgado de Distrito de donde proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Juan A. Mateos*, secretario.

Son copias que certifico. México, Marzo 11 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO de garantías promovido ante el Juzgado de Distrito de Puebla, por Pedro Quijano, contra el alcalde de la Villa de Libres, por violacion de garantías.

PREMIENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito:

El Promotor fiscal, en el presente juicio de amparo promovido por el soldado Pedro Quijano, contra el alcalde de la "Villa de Libres," por haberlo consignado al servicio de las armas, ante vd., dice: que en dicho juicio hay constancias de que el quejoso ha sido desertor de varios cuerpos del ejército nacional, y que aprehendido por la autoridad responsable lo consignó al 10º de infantería.

El Gefe de este cuerpo dá informe mas esacto, y acompaña á su comunicacion de fojas 10 la filiacion de Quijano.

En ella, pues, se ve; que sirvió en las fuerzas del ciudadano general Rodriguez Rocardo, de donde desertó; así como del 15 de caballería y despues del 10, que le habia dado el cargo de arriero.

Todas estas circunstancias manifestadas de parte de la autoridad de la Villa de Libres, y tambien de parte del Gefe del 10º batallon de infantería, merecen